

Editorial elaborado por el equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información política disponible hasta el 11 de enero de 2026 sobre la situación en Venezuela.

Editorial: Venezuela entre el reacomodo interno, el tutelaje externo y una transición sin fecha

Venezuela entra en una fase de reacomodo interno del chavismo, mientras Washington define los ritmos y alcances del proceso de transición. Tanto desde el Ejecutivo, encabezado por Delcy Rodríguez, como desde el Poder Legislativo, presidido por Jorge Rodríguez, se ha evitado ratificar o amplificar las declaraciones y líneas políticas marcadas por Donald Trump. El objetivo inmediato parece ser proyectar una imagen de autonomía, control institucional y capacidad de maniobra frente a la presión internacional.

Paralelamente, Donald Trump anunció un esquema de tutelaje político sobre Venezuela, personificado en Marco Rubio, quien ha delineado las fases del proceso: estabilización, recuperación y una eventual transición democrática. Rubio ha sido explícito al señalar que no existen cronogramas preestablecidos y que este proceso podría extenderse durante años.

El petróleo se consolida como la columna vertebral de la negociación. Estados Unidos asume un rol de administrador energético y socioeconómico estratégico, en un esquema que combina control financiero, tutela política y condicionalidades diplomáticas.

En este marco, los hermanos Rodríguez emergen como el eje central del poder interno. Delcy Rodríguez fue investida como presidenta tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró una "falta forzada", evitando un proceso electoral. Jorge Rodríguez fue ratificado al frente de la Asamblea Nacional, mientras Diosdado Cabello insiste en preservar la narrativa del control militar. El régimen apuesta por ganar tiempo,

administrar presiones y sostener su permanencia en el poder, al tiempo que intenta proyectar una cooperación pragmática ante Washington.

En medio de esta compleja reconfiguración del poder, Diosdado Cabello procura mantener un rol estratégico, pese a las limitaciones impuestas por Washington y la conducción política de los hermanos Rodríguez. Históricamente uno de los principales operadores del chavismo, Cabello ha logrado ubicar figuras de su confianza en posiciones clave del nuevo esquema. Un ejemplo inmediato fue la decisión de Delcy Rodríguez de destituir al mayor general Javier Marcano Tábata como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), para designar al general Gustavo González López, militar cercano a Cabello, con amplia trayectoria en los organismos de seguridad del Estado y señalado por violaciones a derechos humanos, como nuevo responsable de estos aparatos clave de control interno.

Asimismo, Cabello impulsó la designación de Francisco Ameliach como representante ante el Consejo de Estado, un cargo que le permite actuar como enlace entre el Poder Legislativo y este órgano consultivo, coordinando la acción política oficialista en una etapa de marcada fragilidad institucional.

Las iniciativas legislativas de gran alcance impulsadas por el oficialismo, en un contexto de conmoción, fragilidad institucional y cuestionada legitimidad parlamentaria, plantean riesgos evidentes. La aprobación acelerada de reformas sin consulta amplia ni consenso nacional puede profundizar la inseguridad jurídica, incrementar la concentración del poder político y desviar la atención de las prioridades reales del momento: estabilidad política, gestión económica y administración del factor petrolero.

La discusión de un Código de Democracia Directa, la creación de estructuras de "poder popular" paralelas al Estado y propuestas penales de inspiración política, lejos de fortalecer la institucionalidad, pueden consolidar modelos de control social y dificultar cualquier proceso de transición creíble. La ausencia de un debate académico, social y político sólido agrava estos riesgos.

En el plano de derechos humanos, la situación de los presos políticos revela una dimensión crítica y poco visible de la coyuntura. Actualmente se estima que existen alrededor de 900 presos políticos en Venezuela. Se anunció públicamente que cerca de 400 serían excarcelados (lo cual no constituye libertades plenas, pues la mayoría de los casos continúan judicializados); sin embargo, hasta la fecha solo alrededor de 25 han sido beneficiados y se ha registrado un fallecimiento bajo custodia en 2026 (el primero de este año). Un elemento clave para comprender esta dinámica es que los presos políticos, en muchos casos, corresponden a disputas internas del chavismo, donde distintas facciones mantienen detenidos a actores específicos como parte de sus mecanismos de poder y control. Este carácter fragmentado del sistema represivo explica la lentitud, resistencia y selectividad del proceso de excarcelaciones.

Fuera del centro operativo del proceso:

Mientras tanto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han quedado, por ahora, desplazados del centro operativo del proceso. Trump ha señalado que no considera a Machado como una figura adecuada para liderar la transición, postura respaldada por Marco Rubio. Aun así, Machado insiste en su disposición para conducirla, denuncia a Delcy Rodríguez como arquitecta del aparato represivo y agradece la iniciativa estadounidense, llegando incluso a ofrecer a Trump su Premio Nobel de la Paz.

No obstante, en los próximos días se espera que tanto María Corina Machado como Delcy Rodríguez viajen a Washington para reunirse con Trump, aunque no se sabe si coincidirán ni si habrá un encuentro directo entre ellas. Este hecho abre un nuevo espacio de definición estratégica: si Trump decide colocar a Machado al mismo nivel que Rodríguez en la agenda de diálogo, podría legitimar su protagonismo; si, por el contrario, prioriza a Delcy Rodríguez, Machado quedaría relegada a un rol secundario en la definición del rumbo político del país.

Adicionalmente, se ha informado que Delcy Rodríguez sostendrá una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, lo que introduce un elemento regional relevante y sitúa la relación bilateral

Colombia–Venezuela en el centro de los próximos movimientos diplomáticos, con implicaciones directas para la articulación política del proceso venezolano.

Se mantiene, así, una tensión constante entre legitimidades políticas, control fáctico del poder y tutela internacional.

Venezuela atraviesa un escenario inédito en el que convergen el reacomodo interno del poder chavista, la tutela geopolítica externa, tensiones militares latentes, fragilidad institucional y una compleja disputa por la legitimidad política. El petróleo se consolida como eje de financiamiento y negociación; la transición se perfila, por ahora, más económica que política; los riesgos de retrocesos democráticos, abusos y centralización del poder persisten; y la reconstrucción institucional dependerá tanto de los actores internos como del diseño, alcance y límites de la intervención internacional.